

**DENUNCIA HECHO NUEVO. OFRECE PRUEBA. EXPRESA AGRAVIOS.  
PIDO MEDIDA PARA MEJOR PROVEER.**

Excma. Cámara:

**Ignacio Colombres Garmendia**, abogado de la matrícula, manteniendo el domicilio constituido en la calle San Martín 666, piso 6, en mi carácter de apoderado de la demandada, Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A., en los autos caratulados: **“MARTINEZ ECHENIQUE SEBASTIAN c/ TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (Expte 2525/08)** ante V.E. respetuosamente digo:

**I. OBJETO**

En cumplimiento de lo ordenado en providencia de fecha 28/03/2019, vengo a expresar agravios en contra de lo resuelto en los Ptos. III y IV de la sentencia de fecha 01/8/2018 (fs. 647/658) y sus aclaratorias de fecha 22/10/18 (fs. 661) y fecha 20/12/18 (fs. 684/685), solicitando se los deje sin efecto, y en definitiva se exima a mi representada de responsabilidad en el accidente que motiva estos autos (en adelante, el “Accidente”) liberándola del pago de costas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación expondré.

**II. HECHO NUEVO**

**2.1.** Con carácter previo, habiendo tomado conocimiento con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva dictada en autos de un hecho nuevo con influencia decisiva sobre el derecho invocado por mi representada en autos, de conformidad con lo normado en el Art. 298 y 723 del CPCC vengo a alegarlo y probarlo en esta instancia.

Como V.E. podrá verificar, el hecho que se alega tiene estrecha relación con la suerte de la materia litigiosa de este pleito, y recién ha llegado al conocimiento de mi parte en forma casual con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva dictada en autos.

Concretamente se trata de un acuerdo celebrado en fecha “28/12/10” –es decir con posterioridad al inicio de este proceso– entre el actor, el Sr. SEBASTIÁN MARTINEZ ECHENIQUE y la Cía. Aseguradora de mi representada, SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA. También he sido

anoticiado, que en fecha 24/01/2011 el actor Martínez Echenique cobró el monto convenido en el acuerdo denunciado (en adelante, el “Acuerdo”).

Conforme resultaría de la cláusula PRIMERA del Acuerdo, a cambio del pago de la suma de \$17.000,00 (PESOS DIECISIETE MIL) el actor Martínez Echenique se obligaba a “desistir” de la acción y del derecho ejercidos en este proceso en contra de las coaccionadas SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA (en adelante, “Sancor”), mi representada TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. (en adelante, “TCFA”) y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA Y MINERIA (en adelante, Servicios para la Industria”).

En su cláusula SEGUNDA, se habría aclarado que el pago realizado es cancelatorio de todas las obligaciones reclamadas en este proceso. Además en su cláusula TERCERA se acordaba, que las costas de este proceso son a cargo de Sancor.

En la cláusula Tercera del Acuerdo, el actor y Sancor acordaron que: *“el pago de la suma convenida, no implica por parte de la Aseguradora (Sancor Cooperativa de Seguros Limitada), reconocimiento de responsabilidad alguna, ni reconocimiento de hechos o derechos a favor de El Reclamante. Igualmente, en ese mismo actor, el Reclamante y su letrado habrán de suscribir un escrito judicial manifestando que desisten de toda acción y del proceso predicho respecto a la Aseguradora Sancor Cooperativa de Seguros Limitada y sus asegurados Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. y Servicios para la Industria y Minería SRL, con costas en el mencionado juicio a cargo de la aseguradora y también un comprobante adicional extrajudicial en el que quedará manifestado que nada más tienen que reclamar a la Aseguradora, ni a sus aseguradas (Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. y Servicios para la Industria y Minería SRL en virtud de la Litis iniciada por el Reclamante, por considerarse absolutamente satisfecho en su reclamo y pretensiones generadas respecto a éstos (y sin perjuicio de las reservas de las cláusulas 5 y 6), a partir del siniestro que se trata en los autos pre mencionados y extinguida toda acción y derecho devenidos de tal accidente, otorgando CARTA DE PAGO TOTAL Y LIBERATORIA DEL O DE LOS mencionados DEMANDADOS (Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. y Servicios para la Industria y Minería SRL) en tal sentido”.*

V.E., de lo antes expuesto, se sigue que el actor, luego de percibir el pago total y

cancelatorio de Sancor, debió haber desistido, en igual plazo, de la acción y del derecho respecto de mi mandante y de la co-demandada Servicios para la Industria en las presentes actuaciones.

Como surge de las constancias de autos, nada de ello sucedió.

Ni Sancor, ni el actor denunciaron la existencia del Acuerdo.

Muy por el contrario, el actor prosiguió ilícitamente las actuaciones en contra de mi mandante y de Servicios para la Industria por 9 años más!, generando con ello un innecesario dispendio jurisdiccional, gastos y honorarios de letrados en perjuicio de mi mandante; en flagrante afectación de las garantías del debido proceso, igualdad y seguridad jurídica amparados por los arts. 18 y 28 de la Constitución Nacional.

Ahora bien, conforme surge de las propias constancias de autos, el accionante guardó silencio sobre la existencia del referido Acuerdo, el que tampoco fue denunciado por el apoderado de Sancor, el Dr. Jorge Conrado Martínez ante cuyo fallecimiento y falta de nuevo apersonamiento derivó en la declaración de rebeldía de dicha compañía conforme consta en decreto que corre a fs. 291. Ahora bien, el citado Acuerdo, llegó a conocimiento del letrado apoderado de la co-demandada Servicios para la Industria en forma casual luego de dictada la sentencia definitiva, y comunicado a quien suscribe, de allí que recién puede ser denunciado en esta instancia.

## **2.2. Ofrezco Prueba**

### **2.2.1. Prueba Documental**

Como prueba del hecho nuevo alegado, ofrezco:

(i) Copia simple del Acuerdo celebrado, en el que consta la firma del letrado apoderado del accionante y del recibo de pago de la prestación convenida suscripto por el Sr. Martínez Echenique.

Pido se corra traslado al accionante a fin que se manifieste sobre la veracidad de los hechos denunciados y se lo intime a acompañar a las actuaciones el ejemplar original del Acuerdo, y las constancias que acrediten el pago total y cancelatorio efectuado por Sancor al actor conforme lo establecido en el Acuerdo, bajo apercibimiento de ley.

### **2.2.2. Solicito se intime**

Atento a que Sancor ha sido declarada rebelde en este proceso, al fallecer su apoderado y no presentarse con nuevo abogado, pido se libre oficio solicitando

que informe la existencia del Acuerdo con el actor vinculado al hecho que diera lugar a este proceso y el pago de la suma de \$ 17.000 que da cuenta el recibo presentado. La información deberá requerirse fijando un plazo perentorio y bajo apercibimiento de aplicar las sanciones del Art. 42 del CPCC.

El oficio deberá librarse al domicilio de la Casa Central de la referida aseguradora, sita en la ciudad de Sunchales, Provincia de Santa Fe, en Avenida Independencia N 333. Pido se autorice a su diligenciamiento al suscripto y/o a quien este designe.

Para el caso en que se niegue el hecho denunciado, dejo ofrecida prueba pericial contable, debiendo el perito a sortearse informar si el Acuerdo y el pago denunciado se encuentran asentados en las registraciones contables de Sancor.

### **2.3. Solicito pase a Fiscal – Penal**

En virtud de lo denunciado en esta presentación, solicito se remita copia de estas actuaciones al Fiscal en lo Penal, para que evalúe la comisión del delito de fraude procesal.

### **2.4. Se declare nula la Sentencia del 1/8/18**

Solicito se declare nula la sentencia de fecha 1/08/18 y se desestime la acción entablada en contra de mi mandante.

### **2.5. Se suspendan plazos procesales**

Atento al estado de autos, solicito se suspendan los plazos procesales, hasta tanto se resuelva lo solicitado *Supra*.

### **2.6. Costas Procesales**

Con relación a las costas del presente proceso, pido se exima a mi parte y se las imponga solidariamente a Sancor y al accionante, por haber ambos omitido maliciosamente la presentación del Acuerdo cuya cancelación operó el día 24/1/11, dejando que el pleito continúe en contra de mi representada por más de nueve años.

## **III. EXPRESA AGRAVIOS**

A todo evento, y sin perjuicio de dejar aclarado que en el caso en que se admita el hecho nuevo invocado, la apelación de la sentencia de condena dictada en autos será inoficiosa para mi representada, puesto que conforme resulta del Acuerdo agregado el accionante acordaba dar por cancelada sus obligaciones

nacidas del accidente que dio motivo a esta litis, cumpliendo un imperativo procesal vengo a formular los siguientes agravios:

**3.1.** Como primer agravio, imputo al fallo haber resuelto la responsabilidad en la comisión del hecho haciendo parcialmente responsable del mismo a todos los protagonistas del siniestro, pese a haber concluido que el accidente se produjo por culpa del conductor del taxi. Es decir, existe una clara discordancia entre como se concluye que fue la mecánica del accidente y la atribución de culpabilidad del mismo, generadora de una violación al principio de congruencia.

Así el fallo en el último apartado del punto “4.5” del Considerando concluye: *“...Sin embargo también tengo presente que el testigo Lara se detuvo ante el semáforo, lo que me lleva a pensar que el taxi que trasladaba al actor, confiando en el cambio de luz del semáforo, inició su ingreso a la encrucijada antes de que el semáforo de calle Entre Ríos estuviera en verde, lo que lo hace parcialmente responsable en la producción del hecho”*.

Dicho razonamiento es correcto, y como veremos a continuación se condice con las pruebas colectadas en autos, lo que resulta discordante es la conclusión final a la que arriba el sentenciante. Decimos esto, porque si el fallo da por sentado que el taxi “inició” el ingreso a la encrucijada “antes” que el semáforo estuviera en “verde”, resulta evidente que fue éste quien cruzó en rojo. Tal conclusión necesariamente se impone. Y de dicha conclusión solo puede extraerse otra consecuencia su responsabilidad total en la producción del accidente, máxime cuando de la prueba pericial mecánica ha resultado probado y no impugnado que el taxi circulaba a una velocidad que superaba la permitida y la camioneta no.

Esta conclusión sentencial es la que realmente se condice con las pruebas colectadas en autos.

Puntualmente con las declaraciones de los únicos testigos que depusieron en este juicio fueron los ofrecidos por la co-demandada Servicios para la Industria, Sres. Raúl Alberto Juárez –conductor de la camioneta– (fs. 488) y Gastón García Zavalía (fs. 502), cuyos testimonios no fueron ponderados en la sentencia.

Ambos testigos, en sus deposiciones precisas, concordantes y concluyentes, afirman que quien efectivamente cruzó en rojo la encrucijada de calles 24 de Septiembre y Entre Ríos fue el taxista. Insisto, ambas declaraciones vertidas

con la posibilidad de ser controladas por las partes de este juicio no fueron impugnadas en modo alguno. Además aquí debe considerarse, que yerra el sentenciante cuando afirma refiriéndose al testigo Lara que fue el “único presencial” por aparecer en el acta de procedimiento policial, desconociendo que Raúl Alberto Juárez era el conductor de la camioneta –ver acta agregada a fs. 30–, y por ende necesariamente presenció el hecho.

Ahora bien, con relación al testigo Ariel Fernando Lara cuyo nombre apareció inesperadamente en el acta de procedimiento policial que corre a fs. 24 de autos, y cuya declaración en sede penal se produce a fs. 66, no fue citado a autos, lo que evitó que mi parte pudiera controlar la veracidad de su declaración a diferencia de lo que ocurrió con los testigos Raúl Alberto Juárez –conductor de la camioneta– (fs. 488) y Gastón García Zavalía (fs. 502), lo que evidentemente mengua su valor probatorio. Cabe destacar la casualidad, de que el testigo Lara también es taxista, y como se dijo apareció inesperadamente en el acta de procedimiento policial. Obviamente la veracidad de su testimonio solo podría haber sido en algún grado corroborado si declaraba en autos, bajo el control y examen no solo del Juez de Grado sino de las partes, lo que evidentemente echa por tierra su credibilidad.

También es concordante con la conclusión no impugnada a la que llega la pericia mecánica realizada en autos, donde el experto concluye que el taxi no circulaba a una velocidad precautoria. Así el perito ingeniero al responder la pregunta N° 3 –“En particular, precisará en base a las constancias de éste expediente, la velocidad aproximada a la que circulaba el taxi Renault 9, dominio AUX 361”– expresa: “...circulaba a una velocidad distinta de la precautoria conforme lo establece la Ordenanza 942/87 en su artículo N° 22°” (fs. 455 vuelta y 456). En cambio el perito con relación a la velocidad aproximada a la que circulaba la camioneta Toyota Hilux 4x4 Dominio FNT 132 concluye: “...estimo que la velocidad aproximada estaba dentro de lo permitido por la normativa vigente”.

Nuevamente quebranta el principio de congruencia la sentencia, cuando el sentenciante en el Pto. “4.6” del Considerando expresa “Existe numerosa jurisprudencia que determina la responsabilidad del conductor que atraviesa un cruce con luz amarilla...”.

Con dicha conclusión, el fallo malinterpreta las declaraciones de los testigos Juárez y García Zavalía, puesto que ninguno de ellos declaró que la camioneta “inició” el cruce con luz amarilla, sino que el cambio de luz se produce cuando estaban casi terminando el cruce.

Tal malinterpretación persiste cuando en el Pto. 5 del “considerando” concluye: *“Lo dicho me permite arribar a la conclusión de que las causas del siniestro fueron las actitudes antireglamentarias de los demandados quienes transgrediendo el artículo 44, inciso 4° de la Ley 24.449 iniciaron el cruce de la encrucijada de calle 24 de Septiembre y Entre Ríos cuando no se encontraban habilitados por el semáforo existente en la esquina...”*

Dicha conclusión, tal cual arriba lo expresamos, viola el principio de congruencia del fallo, puesto que se contradice con lo expuesto en el último apartado de considerando “4.5” donde expresa: *“...lo que me lleva a pensar que el taxi que trasladaba al actor, confiando en el cambio de luz del semáforo, inició su ingreso a la encrucijada antes de que el semáforo de calle Entre Ríos estuviera en verde,...”*.

Si el taxi inicia el cruce antes que el semáforo de la calle Entre Ríos estuviera en verde, resulta ineludible concluir que pasó en “rojo” y por ende es el responsable exclusivo del accidente. Esta conclusión aparece corroborada por lo que expresa en el fallo en el apartado segundo del Pto 5 del considerando *“Por lo demás “aún teniendo luz verde un conductor no está librado de conducir con prudencia ya que la permisión de paso debe ser siempre interpretada dentro del marco del prudente dominio de la máquina que se usa, incluso frente al hecho irregular de un tercero...”*

Cabe aquí recalcar, que ninguna de las pruebas vertidas en autos ha acreditado que la camioneta Toyota cuya guardia correspondía a la codemandada Industria y Minería SRL dejó de estar dentro del marco del prudente dominio de su conductor. Todo lo contrario, como hemos visto el perito mecánico al responde el punto de pericia N° 5 concluye *“que la velocidad aproximada estaba dentro de lo permitido por la normativa vigente”*.

Por ello también peca de incongruente y falaz la conclusión a la que arriba el fallo en el tercer apartado del considerando “5” al expresar: *“En el presente caso, ninguno de los conductores acreditó tal diligencia, por lo que nos*

*encontramos ante un caso de concurrencia de culpas, con igual porcentaje de responsabilidad. La camioneta Toyota Hilux 4x4 dominio FNT 132, generó riesgo en su acción ya que lejos de respetar la precaución del semáforo amarillo aceleró para “ganar el paso”, a la vez que el ingreso anticipado del taxista determinó como concausa el acaecimiento de la colisión, debiendo cada parte responder en un 50% cada uno frente a los daños sufridos por el actor...”*

Conforme surge de las pruebas citadas, con relación a la camioneta cuya guarda estaba a cargo de Servicios para la Industria, se ha probado que viajaba a la velocidad reglamentaria y que inició el cruce con luz verde, en consecuencia correspondía eximirla de toda responsabilidad en el accidente. Una vez más el fallo extrae consecuencias que resultan discordantes con la mecánica que asigna a la colisión, puesto que si como sostiene el taxista anticipa su ingreso, resulta claro que pasa el semáforo en “rojo”, por ende la camioneta no pasa en “amarillo” sino en “verde”, produciéndose el cambio de luz cuando ya estaba adentro de la encrucijada, circunstancia que la exime de responsabilidad.

**3.2.** Sin perjuicio de que tal cual lo hemos planteado en el agravio anterior, Servicios para la Industria en su carácter de guardián de la camioneta no tuvo responsabilidad en la colisión, por lo que corresponde eximirla de toda condena, al igual que a mi mandante; a todo evento me agravia la procedencia del rubro “incapacidad sobreviniente” a la luz de las pruebas arrojadas a esta causa.

Sobre este rubro el fallo en el punto “6.1.1.” del “Considerando” expresa: “Si bien en autos no se produjo prueba pericial médica, los daños alegados por el actor se encuentran acreditados con la documentación glosada en autos a fs. 86/97 y el propio informe de Prevención ART, ofrecido como prueba por el demandado Servicios para la Industria y Minería SRL, por el cual se indicó que la Comisión Médica n° 1 a través del Expte. 001-L-01276/08 dictaminó a favor del actor una ILPPD del 4,30%, no recurrida por la partes; adjuntándose a fs. 394 una orden de pago n° 0018375 de fecha 27/10/2.008 por la suma de \$ 7.740. Considero justo ante la falta de prueba pericial médica, reconocer por el presente rubro el porcentaje de incapacidad fijado en la Comisión Médica Laboral del 4,30%”.

De la conclusión arriba expuesta, resulta por si sola la improcedencia del rubro pretendido, sin perjuicio de reiterar que conforme hemos



expresado en el agravio anterior mi representada no debería cubrirlo, por no haber tenido ninguna responsabilidad en el accidente.

Decimos esto porque la “incapacidad laboral permanente parcial definitiva” reclamada, ya fue resarcida por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo del empleador del accionante –el Poder Judicial de la Provincia– conforme fue probado en autos y el propio fallo lo sostiene, no habiendo Martínez Echenique acreditado en autos padecer una lesión corporal distinta o que no haya sido cubierta por la indemnización que ya percibió de la ART de su empleadora.

Es decir, el “presupuesto” para que el accionante percibiera en estos autos una suma extra a la percibida de la ART de su empleador en concepto de reparación de su incapacidad sobreviniente, era acreditar que la suma percibida no había reparado integralmente el daño alegado.

Ahora bien, habiendo percibido el accionante una suma por incapacidad sobreviniente, y no habiendo alegado ni cuestionado que dicho monto no reparó integralmente los perjuicios aquí reclamados, resultaba ineludible concluir que el daño se encuentra resarcido y por ende el rubro es improcedente.

Por ello, al ordenar resarcir nuevamente un daño ya cubierto, el fallo incurre en la incoherencia de pretender reparar dos veces una incapacidad que ya fue cancelada.

En otras palabras, el fallo tiene por probada la incapacidad sobreviniente reclamada en base a lo verificado y pagado por la ART del empleador del accionante, ahora bien lo que soslaya, es que ese 4.30% de incapacidad que reconoce, ya fue reparado, no habiendo Martínez Echenique alegado ni demostrado en estos autos que dicho resarcimiento no fue “integral”, lo que convierte por sí solo en improcedente el rubro.

**3.3.** Mi mandante tuvo la titularidad registral de la camioneta en virtud de su carácter de dadora del contrato de leasing celebrado con Servicios para la Industria en fecha 20/4/06 (en adelante, el “Contrato de Leasing”).

El Juez *a quo* atribuye responsabilidad a mi mandante en los hechos de autos en la sentencia de fecha 01/8/18 al decidir que: “...la codemandada adjuntó en copia simple el contrato de leasing donde puede leerse un sello del Registro Automotor, mas no acreditó la inscripción con el contrato original, ni al menos solicitó informe al Registro Automotor pertinente, que permita tenerla por

*efectivamente realizada, y en qué fecha, a fin de ser oponible al tercero perjudicado. Siendo una carga procesal de quien alega un hecho acreditarlo, la falta de prueba de la inscripción del contrato impide al suscripto tener por acreditada la inscripción del contrato por lo que habré de desestimar la defensa de falta de acción interpuesta por Toyota Cía. Financiera de Argentina S.A.”*

Agravia a mi mandante la decisión del sentenciante, teniendo en cuenta que de la prueba documental acompañada en copia por esta parte al contestar demanda e identificada como Anexo II, surge que el contrato de leasing entre TASA y Servicios para la Industria y Minería SRL fue celebrado con fecha 20/6/06 y que fue inscripto en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor con fecha 21/06/06, con anterioridad al accidente objeto de autos.

Resulta arbitrario pretender imputar responsabilidad a mi mandante en su carácter de DADOR del Contrato de Leasing, sin perjuicio de que la Ley 25.248 expresamente libera al dador de responsabilidad en los supuestos como los planteados en autos.

Cuando TASA contestó demanda acompañó copia del contrato de leasing celebrado con fecha 20/04/06 entre TASA y Servicios para la Industria, junto con su constancia de inscripción de fecha 21/04/06 en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor respecto del vehículo marca Toyota Hilux 4x4 cabina doble DX 2.5 TD, motor marca 2KD-7074567, chasis 8AJFR22G464507540, dominio FNT 132 (en adelante, el “Vehículo”).

Esas constancias obran agregadas a estos actuados siendo ambos elementos necesarios ser tenidos a la vista por la Alzada.

Teniendo en cuenta que de la prueba documental acompañada en copia por esta parte al contestar demanda e identificada como Anexo II, surge que el contrato de leasing entre TASA y Servicios para la Industria fue celebrado con fecha 20/6/06 y que fue inscripto en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor con fecha 21/06/06, con anterioridad al accidente objeto de autos, acompañada por esta parte al contestar demanda, vengo a requerir A ESTA Excma. Cámara que como medida para mejor proveer se ordene el libramiento de sendos oficios: (a) Al Registro de la Propiedad Automotor a los fines de que acompañe el informe de dominio histórico de la camioneta Hilux 4x4, cabina doble DX 2.5 TD, motor marca 2KD-7074567, chasis 8AJFR22G464507540, dominio FNT 132 y (b) al Registro

Nacional de la Propiedad Automotor. Registro Sec. Prop. Automotor Cap. 42 (código de Registro 02042) a los fines de que informe la fecha de inscripción del contrato de leasing celebrado entre Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. y Servicios para la Industria y Minería SRL con fecha 20/4/06, cuya copia y constancia de inscripción en el Registro de la Propiedad Automotor de fecha 21/06/06 se adjuntará al oficio.

La realidad es que V.E. debe conocer la información que brinde el Registro de la Propiedad Automotor, que no hará más que confirmar la información que surge de la documental adjuntada en copia (Anexo II) al contestar demanda TASA y obrante a fs. 179-185, de la que surge que mi mandante no tenía la posesión del vehículo Toyota a la fecha del accidente de autos. Dichos instrumentos acompañados en copia por TASA han sido parte de los elementos de prueba que llevaron a la Juez de Grado a fallar de una forma determinada, y/o que han sido indicados por aquél como convictivos para adoptar una postura, y segundo porque mi parte entiende que de tales constancias se desprende -paradójicamente- conclusiones totalmente opuestas a las que arribó la *a quo*, lo que en definitiva hace al debido proceso y garantía de defensa en juicio del art.18 de la Constitución Nacional.

Destaco que a fs. 17 en la demanda la parte actora expuso para justificar la legitimación pasiva de Servicios para la Industria que: “se encuentra pasivamente legitimado, por ser el que tiene el uso u aprovechamiento de la cosa riesgosa, como también el hecho de su dependiente” (sic). Habiéndolo adquirido mediante sistema de Leasing financiero a TASA conforme constancia de autos y por documentación que el propio actor suministró a la presente causa y de la que surgen claramente que el actor sí tenía conocimiento de la existencia del contrato antes de interponer la demanda.

Asimismo, consta a fs. 10 a 12 de la causa penal y a fs. 27 de la presente causa la autorización de TASA para conducir en el país y que fue otorgada en el marco del contrato de leasing con fecha 20/4/06 y cuya autorización era válida hasta el 19/11/08. Es decir, que el vencimiento operó 6 meses después de ocurrido el siniestro. Ello respalda categóricamente nuestros dichos (ver. Fs. 181), en donde manifestamos que el contrato de leasing se encontraba plenamente vigente al momento del siniestro y que fue cancelado después de ocurrido el supuesto

accidente. Por cuanto quedó acreditado en autos que Servicios para la Industria era la tomadora del contrato de leasing.

Asimismo, a fs. 36 vta. se ordena la entrega del Vehículo Toyota al Sr. Serrano, socio gerente de Servicios para la Industria.

De todo lo expuesto se concluye que el hecho de no haber esta parte acompañado en autos el contrato de leasing original junto con el original de su constancia de inscripción no puede en modo alguno ser óbice para no tener por acreditada la existencia del mismo y su consiguiente inscripción en el Registro con anterioridad al acaecimiento del accidente objeto de autos.

Por haber sido parte de los elementos de convicción del Juez *a quo*, la información que sobre el Vehículo Toyota y la inscripción del contrato de leasing que a su respecto obre en el Registro de la Propiedad Automotor deben ser tenidos en cuenta por la Alzada al momento de resolver los recursos presentados.

El propio tomador, al contestar demanda y en la expresión de agravios presentada con motivo de la apelación de la sentencia definitiva ha reconocido expresamente su carácter de tomador del leasing respecto del Vehículo, y encontrarse bajo la guarda del Vehículo al momento del Accidente.

Sin duda, uno de los cambios más importantes introducidos por la ley 25.248 es la modificación del titular de la responsabilidad objetiva consagrada por el art. 1243 del Código Civil y Comercial de la Nación.

En virtud de dicha modificación, **ha quedado expresamente determinado que la responsabilidad objetiva por los daños emergentes del riesgo o vicio de la cosa recae sobre el tomador o guardián de la cosa objeto del contrato. Ello implica que el DADOR, en autos TCFA, quien es titular registral hasta el ejercicio de la opción de compra o conclusión del contrato, queda eximido de responsabilidad objetiva por los daños causados por el riesgo o vicio de la cosa sobre la cual se constituyó el leasing.**

Se transcribe a sus efectos el art. 17 de la ley citada la que establece: *“La responsabilidad objetiva emergente del art. 1113 del Código Civil (actual art. 1243 del Código Civil y Comercial de la Nación) recae exclusivamente sobre el tomador o guardián de las cosas dadas en leasing”.*

Obsérvese que la propia ley hace mención a dos situaciones jurídicas diferentes; por un lado imputa responsabilidad al tomador y por otro amplía la misma al guardián de la cosa, más nunca al dador del leasing.

La jurisprudencia es uniforme en la materia:

*“Resulta improcedente responsabilizar al banco dador, y titular del dominio, por los daños derivados de un accidente de tránsito en el cual intervino el vehículo objeto del contrato de leasing celebrado durante la vigencia de la ley 24.411, pues, visto que el accidente se produjo con posterioridad a la sanción de la ley 25.248, es aplicable al caso lo previsto en el art. 17 de la citada norma en cuanto dispone que la responsabilidad objetiva del art. 1113 del Código Civil recae exclusivamente sobre el tomador o guardián de las cosas dadas en leasing”* (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, Sala IV, 28/03/04. Silva, Jacinto y otros c/ Tessaro, Cristian y otro. LLLitoral 2007, -diciembre-, 1238).

Como se viene sosteniendo, la exención beneficia al dador, toda vez que el tomador es quien ejerce la tenencia de la cosa.

Es por ello, que *“el objetivo del legislador fue precisamente favorecer al dador del leasing eximiéndolo de responsabilidad y dotando a su crédito de mayores seguridades, para alentar precisamente el leasing de automotores y cualquier bien que genere riesgo a terceros”*. (Leasing Análisis Legal, Fiscal y Contable"; p. 77. Fresneda Saieg-Frustagli-Carlos A. Hernández; "Leasing", p. 97, LexisNexis. Paolantonio, Martín E., "Régimen legal del Leasing - Ley 25.248", p. 73).

Así, y con fundamento en el desprendimiento de la guarda, la jurisprudencia ha evolucionado sobre la materia desligando de responsabilidad a quien pruebe que la guarda de la cosa se encontraba en cabeza de un tercero:

*“Resulta improcedente responsabilizar al titular registral de un automotor por los daños y perjuicios ocasionados en un accidente de tránsito, dado que si bien éste no efectuó la denuncia de venta, se encuentra acreditado que con anterioridad al siniestro, se había desvinculado de la guarda del vehículo por haber comprometido en venta la unidad y entregado la posesión”* (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Laboral y de Minería de General Pico, La Pampa. 05/07/07. Arce Oscar A y otro c/ Vanini José R. y otro. LL Patagonia 2007 (octubre), 1272).

Descartada la pretendida imputación objetiva, mucho menos podemos pensar en encuadrar el caso en un supuesto de responsabilidad subjetiva, pues TCFA no tuvo intervención alguna en el accidente, lo cual quedó acreditado en el escrito de demanda y en la propia contestación de demanda de la co-demandada Servicios para la Industria.

**3.4.** Punto aparte merece el hecho de que el Contrato de Leasing fue debidamente inscripto siendo plenamente oponible a terceros o acreedores de las partes.

En efecto, y para que prosperen todos los argumentos vertidos en el punto precedente, la Ley N° 25.248 impone como requisito formal la inscripción del contrato de leasing en la seccional del Registro Nacional de Propiedad del Automotor que corresponda.

Así cuando el art. 11 de la referida ley alude a los “efectos” del contrato debidamente inscripto, debe entenderse que la limitación de responsabilidad objetiva emergente del art. 1113 del Código Civil del dador (art. 17) se haya incluido en los mismos.

Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto en relación a lo que establece la normativa como la jurisprudencia respecto de la falta de responsabilidad objetiva del dador del leasing, se exponen las cláusulas de éste último debidamente firmado e inscripto.

**Remarco que el art. 17 de la ley 25.248 expresamente se menciona en la cláusula octava del Contrato de Leasing al establecerse que la responsabilidad objetiva recaerá exclusivamente en el TOMADOR, es decir, sobre Servicios para la Industria y Minería.**

Asimismo, del Contrato de Leasing surge que en función de lo establecido en la cláusula octava, el tomador del leasing debe mantener indemne a Toyota. Ello se desprende a fs 172.-

Como V. E. podrá apreciar no existe factor alguno de imputación de responsabilidad hacia mi mandante careciendo la actora de acción contra mi representada.

La tradicionalmente denominada defensa de "falta de acción" (sine actione agit) consiste en una ausencia de cualidad, sea porque no existe identidad

entre la persona del actor y aquella a quien la acción está concedida o entre la persona del demandado y aquella contra la cual se concede.

Al respecto, la doctrina y jurisprudencia sostienen que:

*“La excepción procede cuando el actor o el demandado no son titulares de la relación jurídico substancial en que se funda la pretensión, con prescindencia de la fundabilidad de ésta, o, por extensión, cuando el primero carece de un interés jurídico tutelable”.* (Conf. Lino Enrique Palacio - Derecho Procesal Civil - T.VI - pág.132).

*“La falta de legitimación para obrar existe cuando no media coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender o contradecir respecto de la materia sobre la cual versa el proceso”* (Conf. Enrique M. Falcón - Cód.Proc.Civil y Com. T.III - pág.42).

Queda claro entonces que la pretensión ha sido mal enderezada contra mi mandante, quien carece de legitimación pasiva para ser traída a la presente causa siendo Toyota un tercero por completo ajeno a los hechos invocados en la demanda, y en consecuencia la sentencia de grado debe ser revocada en lo que a la condena a mi mandante se refiere.

**3.5.** Con respecto a las costas de este proceso, el fallo considera que *“Atento al principio objetivo de la derrota, y al principio de reparación integral, las costas se imponen a las partes demandadas y a las citadas en garantía, en la misma proporción que la asignación de responsabilidad en el acaecimiento del accidente (artículo 105 inciso 1 CPCCT)”*.

Con relación a este punto, en primer lugar debe considerarse lo ya manifestado a respecto en el Pto. II titulado “HECHO NUEVO”, es decir, debe eximirse a mi parte e imponérselas solidariamente a SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA y al accionante, por haber ambos omitido maliciosamente la denuncia y presentación del Acuerdo cuya cancelación se hizo en fecha 24/01/10, dejando que este pleito continúe para mi representada por más de nueve años.

Sin perjuicio de lo arriba expuesto, subsidiariamente, deberá considerarse conforme arriba se expuso, que el tomador del leasing respecto del Vehículo -la camioneta Toyota Hilx 4x4 Dominio FNT 132- co-demandado en

autos, ha acreditado y resulta de las consideraciones del propio fallo que no tuvo culpa alguna en la producción del accidente, por ende debe eximírsela totalmente de responsabilidad.

Mucho más aún debe eximirse de responsabilidad a mi mandante, en su carácter de dador del leasing debidamente inscripto con anterioridad al Accidente.

#### 4. Se ordene medida para mejor proveer

En virtud de lo antedicho, vengo a solicitar como medida para mejor proveer, en los términos del art. 39 inc. 4 del CPCC, que disponga requerir:

- 4.1. (a) Al Registro de la Propiedad Automotor a los fines de que acompañe el informe de dominio histórico de la camioneta Toyota Hilux 4x4 cabina doble DX 2.5 TD, motor marca 2KD-7074567, chasis 8AJFR22G464507540, dominio FNT 132 y (b) al Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Registro Sec. Prop. Automotor Cap. 42 (código de Registro 02042) a los fines de que informe la veracidad de la fecha de inscripción -21/04/06- del contrato de leasing celebrado entre Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. y Servicios para la Industria y Minería SRL con fecha 20/4/06, cuya copia y constancia de inscripción en el Registro de la Propiedad Automotor se adjuntará al oficio.

#### 4.2. Derecho

La solicitud tiene apoyo jurisprudencial dado que se ha dicho *“Pueden, por lo tanto, disponer los jueces de primera como de segunda instancia medidas para mejor proveer y "ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes”*<sup>1</sup>.

La Cámara del fuero dispuso recientemente *“Como medida para mejor proveer, en los términos del art. 36 inc. 4 CPCC, librese oficio al Banco Mariva SA a efectos de que informe si la demandada dispuso transferencias bancarias a la parte actora, identificando, en su caso, fecha, monto, concepto o imputación del envío de fondos y datos de la cuenta de origen y de destino de las operaciones”*<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> CNCiv., Sala F, 11-2-96, L.L. 1997-C-950, 39.474-S.

<sup>2</sup> CNCom. Sala C, “PHE LEASING S.R.L. c/ ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. s/ EJECUTIVO” Expediente N° 31029/2015/CA3.



Finalmente debe indicarse que ha sido la propia Corte Suprema de la Nación la que indicó que *“la facultad de los jueces de disponer, en cualquier estado del proceso, las medidas necesarias para esclarecer los hechos debatidos no puede ser renunciada, en circunstancias en que su eficacia para la determinación de la verdad sea indudable, pues, de lo contrario, la sentencia no sería aplicación de la ley a los hechos del caso sino precisamente la frustración del ritual de la aplicación del derecho”*<sup>3</sup>.

Todo ello en base a la doctrina del fallo “Colalillo” dictado el 8 de septiembre de 1957 donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Colalillo Domingo v. Cía. de Seguros España y Río de la Plata” (CSJN Fallos 238:550), sentó la doctrina del “exceso ritual”, que dispone:

*“Que, sin embargo, el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales. No se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva, que es su norte”.*

*“Que concordantemente con ello la ley procesal vigente dispone que los jueces tendrán, en cualquier estado del juicio, la facultad de disponer las medidas necesarias para esclarecer los hechos debatidos. Y tal facultad no puede ser renunciada, en circunstancias en que su eficacia para la determinación de la verdad sea indudable. En caso contrario la sentencia no sería aplicación de la ley a los hechos del caso, sino precisamente la frustración ritual de la aplicación del derecho”.*

Doctrina que fue confirmada luego, por la propia Corte en los casos “Jacinto Héctor Cabrea y otros” (Fallos 240:99; 28.2.1958), “Besada Torres de Martínez c/ José Zimmer y otros” (Fallos 247:176; 27.6.1960), “Julio Fernández Diéguez c/ Fondo Librero Iberoamericano” (Fallos 250:42; 4.9.1961), “Creaciones La Academia S.R.L.” (Fallos 261:322; 30.4.1965) y en “Díaz y otros c/ Enrique Coden S.A. y otro” (resuelto el 8.9.1965) y que ha sido adoptada por los tribunales inferiores.

## **V. PETITORIO**

En virtud de lo expuesto, solicito:

---

<sup>3</sup> CSJN, 1-4-97, Rep. E.D. 31-692, n° 1.188.

1. Tenga por denunciado el hecho nuevo, por ofrecida la prueba, se ordene correr traslado al actor y a SANCOR SEGUROS S.A., admitiéndoselo en definitiva.

2. Se haga lugar al ofrecimiento de prueba efectuado en el apartado 2.2. (hecho nuevo).

3. Tenga por expresados los agravios en contra de la sentencia definitiva fecha 01/8/2.018 y sus aclaratorias de fechas 23/10/2018 y 20/12/2.018.

4. En base a lo expuesto, la medida para mejor proveer solicitada deberá ser ordenada y requerirse mediante oficio ley 22172: (a) Al Registro Nacional de la Propiedad Automotor a los fines de que acompañe el informe de dominio histórico de la camioneta Hilux 4x4 motor marca 2KD-7074567, chasis 8AJFR22G464507540, dominio FNT 132 y (b) al Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Registro Sec. Prop. Automotor Cap. 42 (código de Registro 02042) a los fines de que informe la fecha de inscripción -21/04/06 del contrato de leasing celebrado entre Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. y Servicios para la Industria y Minería SRL con fecha 20/4/06, cuya copia y constancia de inscripción de fecha 21/04/06 en el Registro de la Propiedad Automotor se adjuntará al oficio.

5. Oportunamente se haga lugar al recurso de apelación interpuesto y en definitiva se exima a mi representada de responsabilidad en el Accidente, eximiéndola de costas.

Proveer de conformidad que,

**SERA JUSTICIA**

